

Justicia electoral y paridad en elecciones legislativas locales, 2014-2019

Arturo Hernández Cruz¹

Introducción

El sistema de justicia electoral es una pieza central en los procesos electorales actuales, pues estos concluyen una vez que los órganos jurisdiccionales han resuelto todas las impugnaciones y controversias. En estas controversias, la paridad de género ha sido un tema central en la renovación de los congresos locales, sobre todo en la etapa de asignación de escaños de representación proporcional, por lo que el objetivo de mi participación es explicar los distintos criterios y argumentos que han sostenido los órganos jurisdiccionales sobre la aplicación de la paridad de 2014 a 2019.

Para abordar este tema, este texto se organiza en tres apartados: en primer lugar, se explica en qué consistió la inclusión del principio de paridad tanto en el texto constitucional como en las leyes secundarias; en segundo lugar, se presenta un breve análisis estadístico a partir de una base de datos que se construyó con información obtenida de la revisión de acuerdos y sentencias -de autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales sobre la etapa de asignación de escaños de RP; y, en tercer lugar, se explican los criterios más relevantes que han resuelto los órganos jurisdiccionales en torno a la paridad de 2014 a 2019.

Es importante señalar que el periodo abordado (2014-2019), por un lado, obedece a que se tomó como punto de partida el año en que entró en vigor la paridad en el texto constitucional; por otro lado, obedece a que en el lapso de 2014 a 2019 todos los congresos renovaron sus legislaturas en por lo menos dos ocasiones (con la única excepción de Puebla). En función de lo anterior, se ha separado el periodo de estudio en dos etapas: la primera que comprende de 2014 a 2016, periodo en el cual todos los congresos renovaron en al menos una ocasión a sus integrantes. La segunda etapa comprende de 2017 a 2019, en la cual todos los congresos renovaron por segunda ocasión sus legislaturas.

Otra precisión: para este texto solo se consideraron a aquellas entidades federativas que en algún nivel de la cadena impugnativa se resolvieron juicios relacionados con la

¹ Maestro en Estudios Sociales (Línea de Procesos Políticos) por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Actualmente, doctorando en el mismo programa. Contacto: ahernandez.uam@gmail.com

paridad y la representación femenina. Así, los casos que cumplen con este criterio son los siguientes:

Tabla 1. Distribución de casos, 2014-2016

AÑO	ENTIDAD	
2014	Coahuila de Z.	
	Campeche	Michoacán de O.
	Chiapas	Morelos
	Colima	Nuevo León
	Distrito Federal	San Luis Potosí
2015	Guanajuato	Sonora
	Guerrero	Tabasco
	Jalisco	Yucatán
	México	
	Aguascalientes	Hidalgo
2016	Baja California	Tlaxcala
	Chihuahua	

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Distribución de casos, 2017-2019

AÑO	ENTIDAD	
2017	Coahuila de Z.	
	Aguascalientes	Morelos
	Baja California Sur	Nuevo León
	Campeche	Puebla
	Chiapas	San Luis Potosí
2018	Ciudad de México	Sinaloa
	Guanajuato	Tlaxcala
	Jalisco	Veracruz
	México	Yucatán
	Michoacán de O.	Zacatecas
	Baja California	
2019	Quintana Roo	
	Tamaulipas	

Fuente: elaboración propia

Si bien en este documento no se hace referencia a cada uno de estos casos, sí se retoman algunos de ellos para explicar los distintos criterios sostenidos por los órganos jurisdiccionales en torno a la paridad.

La paridad en México

Los derechos político-electorales de las mujeres en México han transitado por diversas etapas. La primera de ellas, sin duda, gira en torno al proceso de reconocimiento -tanto en los textos constitucionales locales como en la Carta Magna- del derecho de las mujeres a votar y ser votadas. No obstante, dado que la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones era muy baja, fue necesario implementar, en la década de los noventa, acciones afirmativas, comúnmente denominadas cuotas electorales de género.

Así, a partir de 1993 se puede hablar del inicio de una segunda etapa de los derechos político-electorales de las mujeres. A partir de ese año el sistema electoral mexicano incorporó por primera vez en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) la recomendación a los partidos políticos de postular mujeres en el

registro de candidaturas a cargos legislativos². Luego, esta incipiente medida fue objeto de modificaciones en los años de 1996³, 2002⁴ y 2008⁵.

Durante esta segunda etapa (1993-2013), se transitó de la cuota de género como medida opcional a la cuota de carácter obligatoria; de una cuota del 30% de candidaturas de un género a una cuota de 40%; del registro invariable de titulares y suplentes de diferentes géneros a la obligación de postulación de fórmulas de un mismo género; del registro discrecional de candidaturas de RP al registro alternado entre hombres y mujeres; de la posibilidad de incumplir con la cuota de género (cuando la selección sea vía elección democrática) a la obligatoriedad de la cuota; de la nula existencia de sanciones por incumplimiento de la cuota al establecimiento de amonestaciones (negación del registro de candidaturas).

Sin embargo, pese a las modificaciones y adecuaciones a la ley electoral, se desarrollaron hechos y situaciones que vulneraban la representación femenina. Tal como apuntan Caminotti y Freidenberg:

Un buen diseño legal y un sistema electoral favorable a la elección de mujeres no impiden las tácticas evasivas de las elites de los partidos políticos [...] En muchísimos casos, las elites mostraron un compromiso escaso y, en ocasiones, expresaron resistencias explícitas [...] ubicando a las mujeres en distritos denominados *perdedores* o en posiciones bajas de las listas; inscribiendo varones con nombres de mujer o ejerciendo presión para que legisladoras electas renuncien a sus cargos, dejando su lugar a un varón (2018: 13-14)

Después de la reforma de 2008 hubo también resoluciones importantes por parte del TEPJF en respuesta a impugnaciones interpuestas por diversos actores. Una de ellas fue el caso de la candidata Telma Guajardo Villarreal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual consistió en que la actora reclamó la reconsideración de la integración de la lista de representación proporcional de la Segunda Circunscripción, pues la lista vulneraba la normatividad referente a la alternancia de géneros en los primeros cinco lugares de cada

² Artículo 175 (fracción 3) del COFIPE publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de septiembre de 1993.

³ Artículo vigésimo segundo del COFIPE publicado en el DOF el 22 de noviembre de 1996.

⁴ Artículos 174-a, 175-b y 175-c del COFIPE publicados en el DOF el 24 de junio de 2002.

⁵ Artículos 219, 220 y 221 del COFIPE publicados en el DOF el 14 de enero de 2008.

lista, ya que el PRD postuló a sus candidatos de dicha circunscripción en el siguiente orden: mujer, varón, varón, mujer y mujer (Cuellar y García, 2010).

La Sala Superior (SS), en el expediente SUP-JDC-461/2009, dio la razón a la candidata por lo que la lista quedó en el siguiente orden: mujer, varón, mujer, varón y mujer. De este modo, la candidata Telma Guajardo, en lugar de encontrarse en el cuarto lugar, quedó posicionada en el tercer lugar. Este caso, sin duda, es un antecedente de gran relevancia sobre todo en lo que respecta al tema de la alternancia de los géneros en las listas de RP.

Ahora bien, con el propósito de evitar fraudes a la ley, el otro caso ocurrió al inicio del proceso electoral 2011-2012, cuando un grupo de legisladoras, académicas y funcionarias impugnaron ante el TEPJF el Acuerdo CG327/2011, emitido el 7 de octubre de 2011 por el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral (IFE). Las demandantes impugnaron, entre otras cosas, que dicho acuerdo no obligaba a los partidos a presentar formulas completas (titular y suplente) de un mismo género, así como la ambigüedad en torno al procedimiento de selección democrática de candidaturas, pues este permitiría incumplir con la cuota de género.

En respuesta, el 30 de noviembre de 2011, la SS del TEPJF resolvió en el expediente SUP-JDC-12624/2011 modificar el acuerdo del IFE a fin de que, sin excepción, las fórmulas (propietarios y suplentes) fueran del mismo género y que la cuota del 40% fuera obligatoria para todos los partidos políticos.

Luego vendría la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de febrero de 2014, en la cual se delinearon las nuevas reglas del juego para los procesos electorales. Si bien la paridad no fue parte de las discusiones iniciales de la reforma electoral, pues solo estaba contemplada en un artículo transitorio, al final se decidió incluir a este principio en el texto constitucional (Medina y Villafranco, 2018).

Con esta reforma se modificó el contenido del artículo 41 constitucional (en su fracción primera, párrafo segundo) quedando establecido que los partidos políticos debían observar “las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales” (CPEUM, 2014).

Luego, en mayo de 2014 la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) estableció las disposiciones aplicables en materia de paridad:

Cuadro 1. Legislación electoral sobre paridad de género en la LGIPE, 2014

Artículo	Contenido
Art. 7 Numeral 1	1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.
Art. 14 Numerales 4 y 5	4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos. En las fórmulas para senadores y diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas por personas del mismo género. 5. En el caso de las candidaturas independientes las fórmulas deberán estar integradas por personas del mismo género.
Art. 232 Numerales 2, 3 y 4	2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación. 3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
Art. 233 Numeral 1	1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en esta Ley.
Art. 234 Numeral 1	1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.
Art. 235 Numerales 1 y 2	1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 233 y 234, el Consejo General le requerirá en primera instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. 2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.

Fuente: Diario Oficial de la Federación (23-05-2014.)

Como se puede apreciar, se dispuso que la mitad de las candidaturas a diputaciones y senadurías debían corresponder a mujeres y la otra mitad a varones, es decir, cada partido político conformará sus candidaturas con 50% varones y 50% mujeres. Este fue el eje central de esta reforma, pero también hubo cambios importantes en otros aspectos, tales como la conformación de las fórmulas (tanto de MR como de RP), en el sentido de que estas debían corresponder al mismo género. Con esto ya no habría ningún problema si algún legislador o legisladora decidiera renunciar, pues su lugar lo ocuparía su suplente del mismo género.

Como ya se ha apuntado, se trató de indicaciones de carácter nacional y justo por ello el numeral 3 del artículo 232 señaló que, a partir de la publicación de esta ley general, la paridad también aplicaba para la conformación de los congresos estatales (incluido el otrora Distrito Federal).

En cuanto a las candidaturas de representación proporcional se eliminó lo correspondiente a los segmentos (de 5 candidaturas). Asimismo, se reafirmó que las candidaturas titulares y suplentes debían corresponder al mismo género y debía observarse que el orden fuera de manera alternada.

Finalmente, el artículo 235 delineó las indicaciones por incumplimiento de la regla de paridad en el registro de candidaturas. En primer término, se señalan los plazos para rectificar (48 y luego 24 horas). En segundo término, de no acatar estas indicaciones, se contempló negar el registro de la candidatura correspondiente.

El aspecto más importante, sin lugar a dudas, fue que en esta reforma se eliminó de manera definitiva la excepción del cumplimiento de la cuota cuando las candidaturas fueran resultado de un proceso de selección interna por la vía democrática. Por lo tanto, a partir de 2014, la paridad quedó establecida como una medida obligatoria sin posibilidad de ser eximida.

La Ley General de Partidos Políticos, publicada en el DOF el 25 de mayo de 2014, además de recuperar los planteamientos anteriores, también contempló un elemento de gran trascendencia:

Cuadro 2. Legislación electoral sobre paridad de género en la LGPP, 2014.

Artículos	Contenido
Artículo 3. Numeral 5.	En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

Fuente: Diario Oficial de la Federación (23-05-2014).

Sin duda, se trató de una regla de vital importancia que permitiría revertir la situación en la cual los partidos políticos tienden a postular sus candidaturas de mayoría relativa del género femenino en los distritos en los cuales no tienen posibilidad de ganar. La forma en que se aplica dicha regla puede ser explicada a partir del caso de la elección federal del año 2015, en la cual el INE:

elaboró un listado con el porcentaje de votación que cada partido obtuvo en los distritos en el proceso electoral anterior y dividió la lista en tres bloques del mismo número de distritos: el primero, con los distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los distritos en los que obtuvo una votación media, y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la votación más alta (Gilas y Kristiansson, 2019: 150-151).

Así, la idea es que los partidos políticos postulen a hombres y mujeres en los distritos de mayoría relativa de manera paritaria, esto es, que en cada uno de los bloques de competitividad sean postulados 50% hombres y 50% mujeres.

Los planteamientos anteriores dan cuenta del marco constitucional y legislativo que entró en vigor en el año 2014 y que estuvo vigente hasta 2019-2020, en virtud de que en junio de 2019 se hicieron adecuaciones al marco constitucional y en abril de 2020 al marco legislativo. En el ámbito constitucional se amplió la aplicación de la paridad (ahora paridad en todo), en el sentido de que este principio no debe limitarse a cargos legislativos, sino que debe aplicarse en los tres poderes del Estado, en los tres niveles de gobierno y también en los organismos constitucionales autónomos (nacionales y locales).

En torno a cargos legislativos, se modificó la fracción primera, párrafo segundo del artículo 41 constitucional, estableciendo ahora que los partidos políticos deben observar “las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular” (CPEUM, 2019), es decir, se eliminó la alusión a cargos legislativos federales y locales.

Asimismo, los artículos 7, 14, 232, 233, 234 y 235 de la LGIPE fueron actualizados en abril de 2020. Los cambios consistieron principalmente en adecuaciones en la redacción: por ejemplo, se remplazó el término “candidatos” por “candidaturas”, “diputados” por “diputaciones”; también se eliminó “Asamblea Legislativa del Distrito Federal” y se dejó solo “los Congresos de las Entidades Federativas”; y, por último, se adicionó que la paridad se debe cumplir en “las planillas de Ayuntamientos y de las Alcaldías” (LGIPE, 2020).

Así, después de dos décadas de cuotas de género, se puede afirmar que a partir de la reforma constitucional de 2014 inició una nueva etapa de los derechos político-electorales de las mujeres, que se reforzó con la reforma de 2019.

Representación femenina según autoridades electorales

Como se planteó en la introducción, en esta sección se va a explicar la representación descriptiva, es decir, la cantidad de mujeres que son asignadas entre una autoridad y otra cuando se controvierten actos relacionados con la paridad de género. Para ello, se han elaborado dos bases de datos (tabla 3 y 4) que dan cuenta de las variaciones a la representación femenina según la autoridad que resuelve las impugnaciones.

Antes de analizar los datos, es importante precisar que las dos bases de datos que se presentan en este texto se conforman del siguiente modo: en las primeras 5 columnas se muestran datos generales como el año de elección, la cantidad de escaños de MR y RP y el total de escaños por ambos principios. Luego, en la siguiente columna, se indica la cantidad de escaños ganados por mujeres por la vía de MR. Ahora bien, las siguientes columnas se distribuyen así: cada autoridad electoral (organismos públicos locales electorales, tribunales electorales locales, salas regionales y la SS de TEPJF) comprende tres columnas: una con la cantidad de mujeres de RP asignadas; una segunda columna con el total de mujeres de MR y RP; y en la tercera columna se indica el porcentaje de mujeres (tanto de MR como de RP). Al final, se indica la cantidad definitiva de mujeres (tanto de MR como de RP) y el respectivo porcentaje que representa:

Tabla 3. Representación femenina según autoridad electoral, 2014-2016

ENTIDAD	AÑO DE ELECCIÓN	ESCAÑOS MR	ESCAÑOS RP	ESCAÑOS TOTALES	TRIUNFOS MUJERES MR	OPLE			TRIBUNAL LOCAL			SALA REGIONAL			SALA SUPERIOR			MUJERES DEFINIT	% DEFINIT
						MUJERES RP	MUJERES MR Y RP	% MUJERES	MUJERES RP	MUJERES MR Y RP	% MUJERES	MUJERES RP	MUJERES MR Y RP	% MUJERES	MUJERES RP	MUJERES MR Y RP	% MUJERES		
Aguascalientes	2016	18	9	27	11	2	13	48	2	13	48	2	13	48	INF	INF	0	13	48
Baja California	2016	17	8	25	7	1	8	32	PS	PS	0	1	8	32	2	9	36	9	36
Campeche	2015	21	14	35	11	8	19	54	PS	PS	0	8	19	54	INF	INF	0	19	54
Chiapas	2015	25	16	41	13	10	23	56	PS	PS	0	8	21	51	11	24	59	24	59
Chihuahua	2016	22	11	33	13	4	17	52	PS	PS	0	4	17	52	INF	INF	0	17	52
Coahuila de Z.	2014	16	9	25	8	1	9	36	1	9	36	5	13	52	4	12	48	12	48
Colima	2015	16	9	25	5	7	12	48	7	12	48	3	8	32	4	9	36	9	36
Distrito Federal	2015	40	26	66	16	12	28	42	12	28	42	15	31	47	14	30	45	30	45
Guanajuato	2015	22	14	36	10	8	18	50	6	16	44	6	16	44	6	16	44	16	44
Guerrero	2015	28	18	46	11	8	19	41	9	20	43	8	19	41	7	18	39	18	39
Hidalgo	2016	18	12	30	9	3	12	40	PS	PS	0	3	12	40	3	12	40	12	40
Jalisco	2015	20	19	39	8	8	16	41	8	16	41	9	17	44	8	16	41	16	41
México	2015	45	30	75	19	9	28	37	9	28	37	FA	FA	0	9	28	37	28	37
Michoacán de O.	2015	24	16	40	11	6	17	43	6	17	43	8	19	48	7	18	45	18	45
Morelos	2015	18	12	30	3	10	13	43	12	15	50	FA	FA	0	3	6	20	6	20
Nuevo León	2015	26	16	42	10	6	16	38	6	16	38	FA	FA	0	6	16	38	16	38
San Luis Potosí	2015	15	12	27	6	3	9	33	4	10	37	3	9	33	3	9	33	9	33
Sonora	2015	21	12	33	9	6	15	45	6	15	45	4	13	39	4	13	39	13	39
Tabasco	2015	21	14	35	6	11	17	49	7	13	37	5	11	31	7	13	37	13	37
Tlaxcala	2016	15	10	25	4	5	9	36	4	8	32	NA	NA	0	NA	NA	0	8	32
Yucatán	2015	15	10	25	7	5	12	48	2	9	36	4	11	44	2	9	36	9	36

Fuente: elaboración propia

PS: *per saltum*⁶

FA: facultad de atracción⁷

INF: impugnación infundada

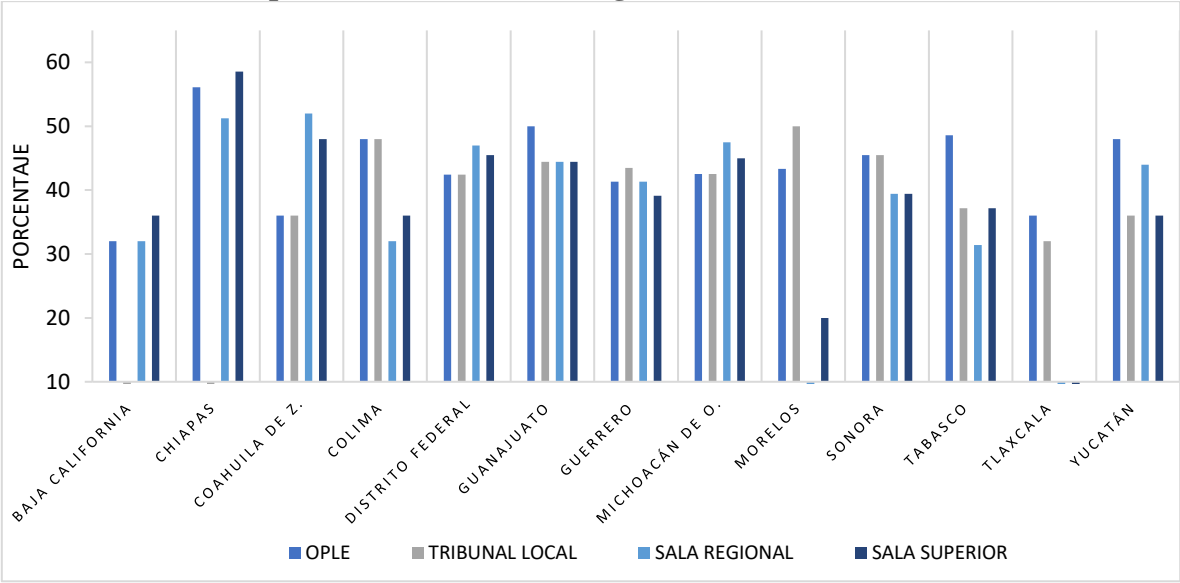
NA: no aplica en razón de que ya no se impugnó la paridad de género.

⁶ Figura jurídica que permite exentar del agotamiento de una de las instancias jurisdiccionales de impugnación electoral. Ordinariamente la cadena impugnativa implica primero recurrir a las instancias jurisdiccionales locales y luego escalar a los órganos jurisdiccionales federales (en primera instancia a la SR correspondiente y finalmente a la SS del TEPJF.

⁷ Atribución de la SS del TEPJF que implica que este órgano jurisdiccional puede conocer y resolver sobre una controversia presentada ante alguna de las SR.

A partir de los datos de la tabla anterior, que corresponden a la etapa 2014-2016, se puede observar que hay entidades federativas en las cuales, si se contrasta la asignación realizada por los órganos administrativos locales (OPLE's) con la asignación definitiva realizada por los órganos jurisdiccionales, la representación femenina puede verse favorecida o afectada:

Gráfica 1. Representación femenina según autoridad electoral, 2014-2016.



Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar, casos como Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Sonora, Tabasco y Tlaxcala al final tuvieron una representación femenina menor con respecto a lo que habían obtenido con la asignación realizada por los OPLE's. En otras palabras, con la resolución de las autoridades jurisdiccionales la cantidad de mujeres fue menor.

En contraste, casos como Baja California, Chiapas, Coahuila, el otrora Distrito Federal y Michoacán al final registraron una representación femenina mayor con respecto a lo que en un principio asignó el órgano electoral local. En el resto de casos (Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León y San Luis Potosí), tanto en la asignación del OPLE como en la asignación definitiva realizada por los órganos jurisdiccionales, se mantuvo la misma cantidad de mujeres, es decir, no hubo afectación final ni positiva ni negativa.

Tabla 4. Representación femenina según autoridad electoral, 2017-2019

ENTIDAD	AÑO DE ELECCIÓN	ESCAÑOS MR	ESCAÑOS RP	ESCAÑOS TOTALES	TRIUNFOS MUJERES MR	OPLE			TRIBUNAL LOCAL			SALA REGIONAL			SALA SUPERIOR			MUJERES DEFINIT	% DEFINIT
						MUJERES RP	MUJERES MR Y RP	% MUJERES	MUJERES RP	MUJERES MR Y RP	% MUJERES	MUJERES RP	MUJERES MR Y RP	% MUJERES	MUJERES RP	MUJERES MR Y RP	% MUJERES		
Aguascalientes	2018	18	9	27	9	4	13	48	5	14	52	5	14	52	5	14	52	14	52
Baja California	2019	17	8	25	9	3	12	48	PS	PS	0	3	12	48	3	12	48	12	48
Baja California Sur	2018	16	5	21	7	4	11	52	5	12	57	5	12	57	5	12	57	12	57
Campeche	2018	21	14	35	9	7	16	46	PS	PS	0	9	18	51	INF	INF	0	18	51
Chiapas	2018	24	16	40	13	12	25	63	PS	PS	0	13	26	65	13	26	65	26	65
Ciudad de México	2018	33	33	66	16	17	33	50	17	33	50	17	33	50	17	33	50	33	50
Coahuila de Z.	2017	16	9	25	9	4	13	52	4	13	52	5	14	56	5	14	56	14	56
Guanajuato	2018	22	14	36	11	6	17	47	7	18	50	7	18	50	7	18	50	18	50
Jalisco	2018	20	18	38	7	8	15	39	8	15	39	9	16	42	9	16	42	16	42
México	2018	45	30	75	22	14	36	48	14	36	48	16	38	51	15	37	49	37	49
Michoacán de O.	2018	24	16	40	10	7	17	43	6	16	40	6	16	40	6	16	40	16	40
Morelos	2018	12	8	20	6	8	14	70	8	14	70	8	14	70	8	14	70	14	70
Nuevo León	2018	26	16	42	12	9	21	50	10	22	52	9	21	50	9	21	50	21	50
Puebla	2018	26	15	41	13	7	20	49	7	20	49	6	19	46	NA	NA	0	19	46
Quintana Roo	2019	15	10	25	9	4	13	52	4	13	52	4	13	52	NA	NA	0	13	52
San Luis Potosí	2018	15	12	27	7	6	13	48	7	14	52	6	13	48	6	13	48	13	48
Sinaloa	2018	24	16	40	10	9	19	48	9	19	48	10	20	50	9	19	48	19	48
Tamaulipas	2019	22	14	36	11	8	19	53	8	19	53	8	19	53	8	19	53	19	53
Tlaxcala	2018	15	10	25	7	8	15	60	8	15	60	8	15	60	8	15	60	15	60
Veracruz	2018	30	20	50	15	10	25	50	PS	PS	0	10	25	50	10	25	50	25	50
Yucatán	2018	15	10	25	7	5	12	48	3	10	40	5	12	48	5	12	48	12	48
Zacatecas	2018	18	12	30	5	10	15	50	10	15	50	10	15	50	9	14	47	14	47

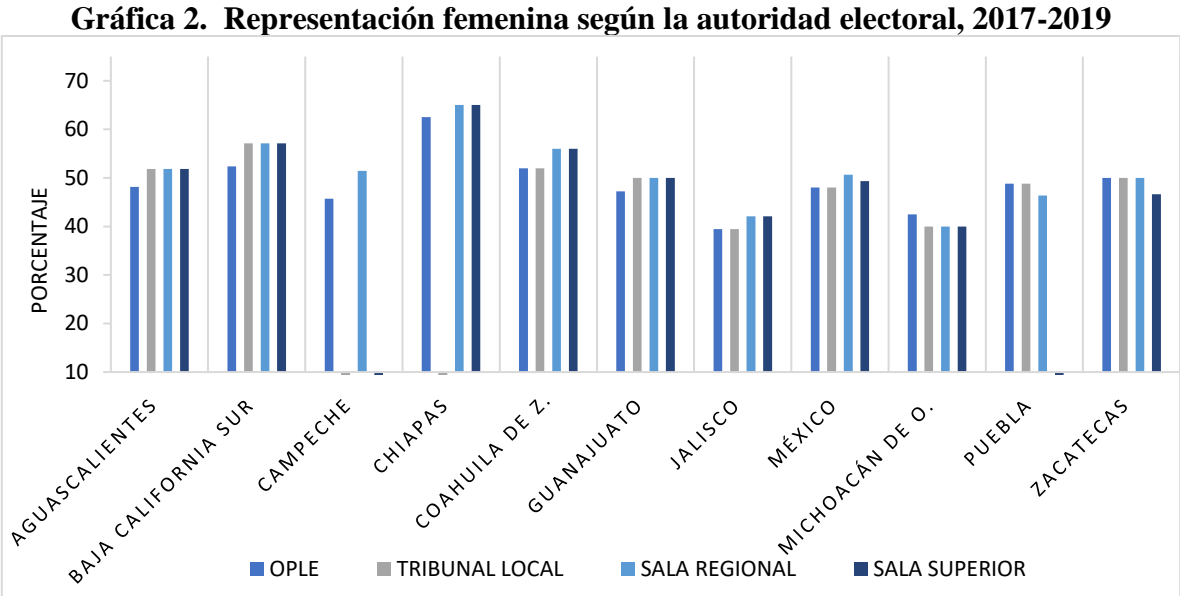
Fuente: elaboración propia.

NA: no aplica en razón de que ya no se impugnó la paridad de género.

PS: *per saltum*.

INF: sentencia infundada o desechada.

De acuerdo con los datos anteriores, los cuales corresponden a la etapa de 2017 a 2019, en la siguiente gráfica se muestran los casos que variaron la cantidad de mujeres según la asignación realizada por el OPLE y la asignación definitiva realizada por los tribunales electorales:



Fuente: elaboración propia.

Como se observa, la mayoría de casos -en que en alguna etapa de la cadena impugnativa se controvertió la paridad en la asignación de escaños de RP- tuvieron una afectación final favorable a la representación femenina. Es decir, los órganos jurisdiccionales asignaron más mujeres que los órganos administrativos (OPLE's).

Solo los casos de Michoacán, Puebla y Zacatecas al final tuvieron una afectación negativa con respecto a la asignación realizada por los OPLE's. El resto de casos (Baja California, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán), si bien tuvieron impugnaciones en materia de paridad, no hubo cambios en la cantidad de mujeres entre la asignación inicial del OPLE y la asignación definitiva de la autoridad jurisdiccional.

Resoluciones sobre paridad en congresos legislativos, 2014-2019

Los resultados obtenidos de la revisión de acuerdos y sentencias emitidas en el lapso de 2014 a 2019, sobre la aplicación de la paridad en la asignación de escaños de RP en congresos locales, se pueden sintetizar en los siguientes términos:

Tabla 5. Síntesis de resultados observados, 2014-2019

Primera etapa (2014, 2015 y 2016)	Segunda etapa (2017, 2018 y 2019)
Paridad solo en postulación	Paridad en postulación e integración
En sistemas de una lista predominó el principio de auto organización partidista (asignación solo por orden de prelación).	En sistemas de una lista predominó el principio de paridad (asignación por orden de prelación, pero de ser necesario con ajustes).
En sistemas de lista complementaria, en la lista “b” predominó el principio democrático (ordenar solo por porcentaje de votación).	En sistemas de lista complementaria, en la lista “b” predominó el principio democrático, pero con posibilidad de realizar ajustes (ordenar incluso aplicando la alternancia de géneros).
Criterios de interpretación “formalistas”.	Criterios de interpretación “progresistas”.
	Nuevos dilemas: la paridad como mandato de optimización flexible y los límites a la paridad.

Fuente: elaboración propia.

a) De la paridad en postulación a la paridad en integración

En el periodo que va de 2014 a 2016, las resoluciones del TEPJF en materia de paridad fueron inestables e incluso contradictorias (Medina, 2016), pues mientras que en 2014 -en el caso del congreso de Coahuila- en el expediente SUP-REC-936/2014 el TEPJF resolvió armonizar los principios de paridad, alternancia y auto organización partidista, con el fin de revertir la subrepresentación histórica de la mujer coahuilense, en los casos que se presentaron en los años 2015 y 2016, el TEPJF no sostuvo el mismo criterio.

Una de las razones del por qué en 2014 sí se aceptó modificar las listas de RP y en los casos de 2015 y 2016 no, fue el hecho de que en Coahuila el ajuste fue mínimo, toda vez que la SS resolvió solo alterar una lista de RP: la del partido con menor votación, al cual le correspondió modificar una candidatura masculina por una femenina. En cambio, en el resto de casos de 2015 y 2016, el TEPJF resolvió que debía prevalecer la auto organización por encima de la paridad, pues ajustar las listas de RP de manera desproporcionada no solo vulneraba los principios de auto organización partidista, sino también los principios de voluntad popular, certeza y seguridad jurídica de las candidaturas e incluso el de la paridad misma.

Un claro ejemplo de que los ajustes a las listas de RP eran desproporcionados fue el caso de Morelos (2015), en el cual el OPLE decidió alterar el orden de prelación de las listas partidistas y con ello, en lugar de tomar la primera posición de cada lista (correspondientes a hombres), tomó los segundos lugares (correspondientes a mujeres), lo cual dio como resultado una asignación de 10 mujeres y 2 hombres. Inconformes con lo anterior, los afectados impugnaron el acuerdo del OPLE ante el tribunal electoral local (expediente TEE-JDC-255-2015-1), no obstante, esta autoridad no solo reafirmó la postura del OPLE, sino que resolvió asignar los 12 escaños de RP a las mujeres, pues así se garantizaba la integración paritaria del congreso morelense.

Los afectados solicitaron que se aplicara la facultad de atracción por parte de la SS. Así, esta sala determinó en el expediente SUP-JRC-680/2015 que fue incorrecta la forma en que se aplicó el principio de paridad, puesto que la asignación de escaños debió realizarse siguiendo el orden de prelación de las listas registradas por cada partido político; de lo contrario, se vulneraba el principio de auto organización partidista. Entonces, la SS realizó la asignación definitiva conforme al orden de prelación de las listas de RP, con lo cual 3 escaños fueron para mujeres y 9 para hombres.

Este mismo criterio aplicado al caso Morelos fue empleado en los casos de Colima (Expediente SUP-REC-756/2015), Sonora (expediente SUP-REC-641/2015), Tabasco (expediente SUP-REC-866/2015) y Tlaxcala (expediente SUP-REC-809/2016), en los cuales los respectivos OPLE's o tribunales locales asignaron escaños de RP -mediante el ajuste de las listas- a fin de que la composición fuera paritaria; no obstante, el TEPJF revocó esas asignaciones bajo el argumento de que la paridad se agotaba en la etapa de postulación de candidaturas.

Ahora bien, a partir de 2017 las resoluciones de la SS -la cual fue renovada por completo entre los meses de octubre y noviembre de 2016- fueron en el sentido de dar preminencia a la paridad por encima de la auto organización partidista (Medina y Villafranco, 2018). Hubo casos excepcionales como Michoacán (expediente ST-JRC-153/2018) y Puebla (expediente TEEP-A-069/2018), sin embargo, en el resto de casos prevaleció el criterio de la paridad en integración.

Para ilustrar, se puede hacer referencia al caso de Veracruz en 2018, en el cual el OPLE, una vez que determinó la cantidad de escaños que correspondía a cada partido, primero asignó siguiendo el orden de prelación de las listas, lo que arrojó un resultado de 8 mujeres y 12 hombres; luego, al considerar que el género femenino se encontraba subrepresentado, pues tomando en cuenta las asignaciones de RP con los triunfos de mayoría, la integración final era de 23 mujeres y 27 hombres, el OPLE decidió ajustar dos escaños de RP a los partidos con el menor porcentaje de votación (PVEM y PRD), con lo cual se logró una composición paritaria.

La asignación del OPLE fue impugnada, vía *per saltum*, ante la Sala Regional (SR) Xalapa, la cual sostuvo en el expediente SX-JDC-905/2018 que los ajustes realizados por el OPLE fueron válidos porque estaban plenamente justificados en la normatividad electoral vigente. Además, dichos ajustes fueron objetivos, razonables y proporcionales con respecto a la afectación a otros derechos.

El caso llegó a la SS (expediente SUP-REC-1755/2018), no obstante, esta instancia confirmó la resolución de la sala Xalapa (que a su vez confirmó el acuerdo del OPLE), es decir, confirmó que los ajustes aplicados en favor del género femenino fueron objetivos, razonables y proporcionales.

En síntesis, de 2017 a la fecha el TEPJF ha avalado la modificación a las listas de RP en favor de la paridad siempre y cuando los ajustes sean objetivos, razonables y proporcionales, tal como plantea la Jurisprudencia 36/2015. Asimismo, esta perspectiva que favorece a la paridad por encima de otros principios quedo tutelada en la Jurisprudencia 11/2018, según la cual, en la interpretación de las reglas electorales se debe observar la mayor protección para las mujeres (aunque más adelante se explicará que la paridad tiene límites).

b) La paridad en sistemas de lista única

Entidades federativas como Coahuila, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tlaxcala tienen la característica de que son sistemas de una sola lista de RP, la cual es integrada (alternando los géneros) por los partidos políticos previamente a la jornada electoral.

Como ya se explicó en el inciso anterior, de 2014 a 2016 se respetó el orden de prelación de las listas únicas de RP en estas entidades (con la excepción de Coahuila), es decir, en esta etapa predominó el principio de auto organización sobre la paridad, pues las asignaciones se realizaron conforme al orden registrado por los partidos políticos. No obstante, para la segunda etapa de 2017 a 2019 en estas entidades con sistema de lista única hubo casos (como Baja California Sur, Veracruz y Tamaulipas) en los cuales las autoridades administrativas o jurisdiccionales modificaron el orden de las listas; es decir, le dieron prioridad a la paridad por encima de la auto organización.

c) La paridad en sistemas de lista mixta

Entidades como Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro y Yucatán contemplan un sistema de lista mixta: una lista previamente registrada y una lista que se genera después de la jornada electoral con aquellos candidatos que no lograron triunfos de MR (mejores perdedores); en estos casos, al final, ambas listas se intercalan.

Ahora bien, en el caso de estas entidades la disyuntiva fue la siguiente: ¿cómo integrar la lista complementaria? En otras palabras, ¿debe prevalecer el principio de alternancia (ordenar en función de los porcentajes más altos de votación, pero alternando los géneros) o debe prevalecer el principio democrático (ordenar en función de la votación sin importar el género)?⁸

En la mayoría de los casos revisados en la primera etapa de estudio (entre ellos Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Yucatán), en los cuales se pedía que se aplicara la alternancia de géneros en la lista “b”, pues ello beneficiaría al género femenino, la SS resolvió que dichas listas debían conformarse en función del porcentaje de votación sin observar la regla de alternancia de géneros.

Nuevo León, por ejemplo, es un caso particular porque por RP solo contempla una lista, la cual se integra por los candidatos y candidatas que no lograron triunfos por la vía de

⁸ Karolina Gilas y Carlos Báez han planteado que los sistemas electorales locales que contemplan listas complementarias (de mejores perdedores) no son compatibles con la paridad de género. Incluso ellos plantearon la necesidad de “declarar la inconstitucionalidad de ese tipo de listas a la luz del principio de paridad de género, o bien, asumir que las listas generadas bajo ese mecanismo no serán paritarias” (2017: 26).

mayoría y se ordena de manera descendente según el porcentaje de la votación sin observar la alternancia de géneros. Así fue como procedió el OPLE de Nuevo León al ordenar las listas de RP en la elección de 2015.

No obstante, ante el órgano jurisdiccional local se pidió que se realizaran los ajustes necesarios en las listas de RP a fin de lograr una composición paritaria. En respuesta, el tribunal local resolvió en el expediente JDC-025/2015 que la lista no podía ser alterada, pues ello vulneraría el principio de voluntad popular. Luego, el caso llegó, por la vía de la facultad de atracción, a la SS del TEPJF y en la resolución emitida en el expediente SUP-JDC-1236/2015 se consideró infundada la pretensión de alterar las listas bajo los siguientes argumentos: primero, no era posible subsanar en la etapa de asignación de escaños de RP la disparidad entre hombres y mujeres; segundo, alterar el orden de prelación de las listas, además de no tener asidero constitucional, vulneraría el sistema de representación proporcional en sí mismo; y, tercero, que la paridad se limitaba a la etapa de postulación.

El criterio que se usó en el caso de Nuevo León se sostuvo también en los casos de Estado de México (expediente SUP-JRC-693/2015), Guanajuato (expediente SUP-REC-724/2015), Jalisco (expediente SUP-REC-841/2015), Hidalgo (expediente SUP-REC-245/2015) y Yucatán (expediente SUP-REC-575/2015).

Sin embargo, hubo casos en que la conformación de la lista “b” ameritó otro tipo de respuesta por parte de los órganos jurisdiccionales. Se trata de los casos del otrora Distrito Federal en 2015 y Baja California en 2016, no obstante, para explicar cómo resolvió el TEPJF, solo se hará referencia al caso capitalino y, en particular, a lo que se resolvió con la lista “b” del PRI.

En dicho caso, el OPLE ordenó la lista “b” del PRI en orden descendente de votación sin observar la alternancia de géneros (lo cual beneficiaba al género femenino, pues bajo ese criterio los primeros dos lugares de la lista “b” del PRI les correspondían a mujeres); los afectados con la resolución del OPLE, acudieron al tribunal local pidiendo que se aplicara la regla de alternancia de géneros. El tribunal resolvió en el expediente TEDF-JLDC-192/2015 ordenar las listas “b” por porcentaje de votación, alternando un género y otro.

Al verse afectada la candidata del PRI (que había obtenido el segundo porcentaje más alto de votación) acudió a la SR reclamando que se respetara el orden de la lista “b” con dos mujeres en el primer y segundo lugar, pues ello le permitiría acceder a un escaño. La SR (en el expediente SDF-JRC-260/2015) le dio la razón; el argumento de su fallo fue que la candidata no solo había obtenido un mayor porcentaje de votación con respecto a sus compañeros varones, sino que se trataba de una persona perteneciente a un grupo en desventaja (mujeres). Por lo tanto, se le debía respetar el mejor lugar, haciendo una excepción a la regla de alternancia en la lista complementaria⁹.

Los inconformes acudieron a la SS, la cual resolvió en el expediente SUP-REC-675/2015¹⁰ que debían armonizarse los principios en controversia (alternancia de géneros, principio democrático y auto organización). Así, dado que a este partido le correspondieron 5 escaños de RP, el TEPJF determinó lo siguiente:

- Observando la auto organización, el escaño 1 para el hombre que encabeza la lista “a”;
- Observando la regla de alternancia, el escaño 2 para la mujer (mejor perdedora) que encabeza la lista “b”;
- Observando el principio de alternancia y la auto organización, el escaño 3 para el siguiente hombre, pero de la lista “a”;
- Observando el principio democrático y la alternancia de géneros, el escaño 4 le corresponde a una mujer de la lista “b” (la segunda mujer mejor perdedora);
- Observando la paridad y la auto organización, el escaño 5 para otra mujer de la lista “a”.

Con esta resolución, la SS consideró que se logró la menor afectación a los derechos y principios en pugna (paridad, alternancia de géneros, auto organización partidista y voluntad popular).

En lo relativo a la etapa de 2017 a 2019, lo que se halló fue que el ordenamiento de dichas listas predominantemente continuó siendo en función de los porcentajes de votación, pero hubo un criterio adicional: si después de ordenar por porcentaje de votación y asignar

⁹ Este fue el caso del PRI, no obstante, en la misma elección capitalina, ese mismo criterio se aplicó con el Partido Verde Ecologista de México (expediente SDF-JDC-645/2015) y con el Partido Encuentro Social (expediente SDF-JRC-260/2015).

¹⁰ Este expediente corresponde al caso del PRI, pero por separado también se generó el expediente SUP-REC-679/2015 (caso PVEM) y SUP-REC-696/2015 (caso PES).

los escaños de RP se observa que la integración final no es paritaria, entonces es válido realizar los ajustes necesarios tanto en la lista “a” como en la lista “b” hasta lograr que la composición sea paritaria.

Un caso que da cuenta de lo anterior fue la Ciudad de México en 2018. Después de las resoluciones del tribunal local y de la SR, la SS del TEPJF generó el expediente SUP-REC-1176/2018, en el cual los recurrentes reclamaban la aplicación del principio de alternancia en la integración de las listas definitivas a fin de lograr que la composición final del congreso fuera paritaria.

La SS resolvió realizar nuevamente la distribución de escaños de RP, primero, asignando según el orden de prelación de las listas, lo cual dio como resultado 15 mujeres y 18 hombres, que sumados a los triunfos de MR (16 mujeres y 17 hombres) daba un total de 31 mujeres y 35 hombres. Por lo tanto, la SS, al advertir que el género femenino se encontraba subrepresentado, resolvió ajustar dos asignaciones de RP a los partidos con menor porcentaje de votación (PT y PVEM) a fin de lograr que la composición final del congreso capitalino fuera de 33 mujeres y 33 hombres.

d) La paridad como mandato de optimización flexible

Con la transición de la paridad en postulación a la paridad en integración también se presentaron nuevos dilemas. Uno de ellos fue el referente a las impugnaciones que se presentaron en entidades como Coahuila en 2017 y Morelos, Tlaxcala y Tamaulipas en 2018, en las cuales se reclamó que la paridad fuera aplicada a favor del género masculino, pues el género femenino había obtenido porcentajes mayores al 50% de los escaños. Es decir, en estos casos se pedía que se ajustaran las asignaciones, a fin de lograr una composición estrictamente paritaria.

Las resoluciones dictadas en los expedientes SUP-REC-1334/2017 (caso Coahuila), SUP-REC-1052/2018 (caso Morelos), SUP-REC-1021/2018 (caso Tlaxcala) y SUP-REC-533/2019 (caso Tamaulipas) fueron en el siguiente sentido: tanto las acciones afirmativas como la paridad de género no pueden implementarse en perjuicio del género femenino, pues se trata de un grupo social e históricamente en desventaja. En otras palabras, las acciones afirmativas y la paridad no pueden implementarse en favor del género masculino, pues solo

protegen a grupos en desventaja y el género masculino no lo ha sido. Por lo tanto, es válido que haya un mayor número de mujeres que de hombres, lo cual no implica en modo alguno discriminación ni afectación al principio de igualdad.

Justo a partir de estos precedentes es que la paridad debe comprenderse también como un mandato de optimización flexible que debe procurar siempre la mayor protección de los derechos de las mujeres. Lo anterior quiere decir que el efecto óptimo de la paridad es que los escaños sean distribuidos igualitariamente (50-50 y en el caso de los congresos impares el escaño que hace la diferencia debe ser a favor de las mujeres), tal como también plantea la Jurisprudencia 11/2018. Sin embargo, ese óptimo puede ser flexible cuando la aplicación de las normas tiene como efecto una integración en la que el género femenino representa más allá del 50% de los escaños. Desde este punto de vista, la paridad no debe limitarse a una conformación estrictamente de 50% hombres y 50% mujeres cuando la integración de los órganos legislativos beneficia a la representación femenina.

e) La paridad flexible

En la revisión de sentencias se encontraron al menos dos casos que nos permiten hablar de los límites de la paridad. Se trata de las resoluciones sobre los congresos de Sinaloa (SUP-REC-1368/2018) y Zacatecas (expediente SUP-REC-1150/2018). En el primer caso, la controversia inició con la asignación del OPLE, pues considerando los escaños de MR y RP el órgano legislativo sinaloense quedaría conformado por 19 mujeres y 21 hombres.

Quienes acudieron al tribunal local reclamaban que se hiciera el ajuste a otra candidatura de RP a fin de lograr la composición estrictamente paritaria (20 mujeres y 20 hombres). En respuesta, en el expediente TESIN-REC-01/2018, el tribunal local sostuvo los siguientes argumentos: primero, la paridad de género se cumplió plenamente en la etapa de postulación; segundo, la composición final entre hombres y mujeres fue resultado de la voluntad ciudadana; tercero, la disparidad generada no fue desproporcionada, pues la diferencia porcentual entre un género y otro fue de 5%; y, por último, que no era posible ni obligatorio realizar ajustes adicionales, pues la ley vigente solo contemplaba la paridad en postulación, además de que para la elección de 2018 se contempló que las listas de RP debían estar encabezadas por mujeres. Por lo tanto, el tribunal confirmó la asignación del OPLE.

La SR, no obstante, resolvió en el expediente SG-JDC-4049/2018 que sí era posible realizar ajustes para lograr la integración paritaria, pues pese a la aplicación de la paridad y la regla de alternancia, además del hecho de que las listas de RP estaban encabezadas por mujeres, no se logró garantizar la paridad en la integración. En consecuencia, ordenó realizar los ajustes necesarios para que la conformación final fuera de 20 mujeres y 20 hombres.

Sin embargo, en la última instancia jurisdiccional se resolvió que la SR llevó a cabo una indebida interpretación de los alcances de la paridad de género, dado que no existía ninguna justificación sólida para modificar las asignaciones. Para que pudieran realizarse ajustes se debían cumplir o encontrar en alguno de los siguientes supuestos: que la representación final haya sido notoriamente desequilibrada o que en sus reglas no existieran mecanismos para garantizar la mayor presencia de mujeres.

Según el TEPJF, Sinaloa, a diferencia de otros casos, no se halló en estos supuestos, pues los resultados no afectaban desmedidamente la representación femenina, ya que ellas lograron el 48% de la representación legislativa. Asimismo, era improcedente el ajuste porque la ley incluso contemplaba medidas adicionales (que las listas las encabece el género femenino). Por lo tanto, la SS determinó devolver el escaño al candidato del PAN que había sido otorgado a una mujer, quedando así una integración final de 19 mujeres y 21 hombres.

El otro caso fue Zacatecas en 2018: el OPLE asignó los escaños de RP con la intención de que el congreso fuera paritario; para ello, realizó ajustes en tres candidaturas, entre ellas la de un candidato de PAN en condición de discapacidad. El afectado acudió al tribunal local, el cual en el expediente TRIJEZ-JDC-112/2018 resolvió que la asignación del OPLE armonizó correctamente el principio de paridad con otros principios, por lo que otorgar -por ajuste- un escaño a una mujer y retirarlo a un hombre en condición de incapacidad no generaba discriminación. Este mismo criterio lo sostuvo la sala Monterrey en el expediente SM-JDC-707/2018, por lo que el afectado recurrió a la última instancia jurisdiccional.

La SS en el expediente SUP-REC-1150/2018) resolvió que le asistía la razón al recurrente, pues la SR no debió limitar su interpretación al cumplimiento de la paridad de género, sino que también debió ponderar la condición de persona con discapacidad, pues de acuerdo con el marco legal, constitucional y convencional existe una protección reforzada de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad.

De acuerdo con la SS, el principio de paridad de género debió ajustarse a las circunstancias fácticas y no negar a otros grupos vulnerables como lo son las personas con discapacidad o los migrantes. Por tanto, con la resolución de la SS, la integración final fue de 16 hombres y 14 mujeres, lo cual -a decir de este órgano- no afectó desproporcionadamente la paridad de género.

A partir de esta resolución es que se habla también de paridad flexible en el sentido de que muy excepcionalmente habrá casos en los cuales no pueda ser garantizada plenamente la conformación 50-50, en virtud de que la paridad no debe afectar a otros grupos vulnerables, por lo tanto, habrá casos en los que deba ceder.

Conclusiones

Como se puede apreciar, entre 2014 y 2016, en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales (con la excepción de Coahuila), en lo que respecta a la asignación de escaños de RP, predominó el argumento a favor de la auto organización de los partidos, por lo que las asignaciones se realizaron conforme al orden de prelación registrado por los partidos políticos.

En estos años las resoluciones del TEPJF fueron más de corte “formalista”, es decir, que resolvieron en función de lo que contemplaba el marco constitucional y normativo, de modo que no se tomaron en consideración otros aspectos de carácter fácticos (como sí se hizo en el caso de Coahuila). Desde dicha perspectiva “formalista”, como las reglas electorales no contemplaban realizar ajustes, los órganos jurisdiccionales sostuvieron que la paridad de género debía limitarse a su cumplimiento en la etapa de postulación y registro de candidaturas.

En contraste, entre 2017 y 2019, las resoluciones jurisdiccionales en su mayoría avalaron que el principio de paridad debía garantizarse también en la etapa de integración (con las excepciones de Sinaloa y Zacatecas), aun cuando esto vulnerara el principio de auto organización, pues para el TEPJF este principio, así como el orden de prelación de las listas tienen un carácter instrumental, por lo que no podían estar por encima ni de la paridad ni de las acciones afirmativas en favor del género femenino.

Justo por lo anterior es que se ha planteado que a partir de 2017 prevaleció una perspectiva de interpretación “progresista” a favor de la paridad de género. Desde este punto de vista, las asignaciones de RP se deben realizar, en un primer momento, respetando el orden de prelación de las listas, pero una vez que se ha verificado la composición general (incluyendo los escaños de mayoría relativa), en caso de ser necesario, en un segundo momento, es válido realizar los ajustes que sean necesarios, a fin de compensar el desequilibrio de los géneros.

En efecto, se puede afirmar que, en los últimos procesos electorales, los órganos jurisdiccionales sí contribuyeron al establecimiento de congresos paritarios confirmando o resolviendo controversias bajo el criterio de procurar la mayor protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

Si bien es cierto que las autoridades jurisdiccionales han jugado un papel importante, no se puede omitir que también han sido importantes las adecuaciones a las reglas electorales de las entidades federativas. En los últimos procesos electorales, entidades como Tlaxcala, Baja California Sur, Chiapas, Morelos y, entre otros, Sinaloa han contemplado en sus reglas electorales (ley electoral, reglamentos y/o lineamientos) acciones afirmativas adicionales como, por ejemplo, la que establece que en el primer lugar de las listas de representación proporcional deben ser postuladas fórmulas del género femenino.

No se puede omitir tampoco que otra acción afirmativa que se contempla para el principio de mayoría relativa y que juega un papel determinante es el de la paridad transversal, que implica que sean postuladas fórmulas del género femenino no solo en distritos en los cuales los partidos políticos no tienen posibilidades de triunfo, sino que sean postuladas de manera paritaria en bloques de competitividad baja, mediana y alta. No se hizo mayor hincapié en este tema porque las resoluciones que se presentaron en este texto se relacionaron con la etapa de asignación de escaños de RP, etapa en la cual ya han sido resueltas las controversias propias del registro de candidaturas de mayoría.

Fuentes consultadas

Caminotti, Mariana y Freidenberg, Flavia (2018). “Reformas electorales inclusivas en América Latina y retos para la igualdad real de las mujeres en la política”, en Freidenberg, Flavia et al, *Mujeres en la política. Experiencias nacionales y subnacionales en América Latina*, IECM-IIIJ-UNAM, México.

Cuéllar, Angelica y García, Iván (2010). *Equidad de género y representación. La regla de alternancia para candidaturas de RP. Comentarios a la sentencia SUP-JDC-461/2009*, TEPJF, México.

Gilas, Karolina y Christiansson, Mikaela (2018). “La paridad de género en México y la regla de los distritos perdedores”, en Freidenberg, Flavia et al, *Mujeres en la política. Experiencias nacionales y subnacionales en América Latina*, IECM-IIIJ-UNAM, México.

Gilas, Karolina y Báez, Carlos (2017). “Paridad de género: entre acceso a las listas y acceso a los cargos”, en *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, núm. 36 (enero-junio), IIIJ-UNAM, México.

Medina, Eduardo (2016). “La justicia electoral mexicana o sobre la falta de estabilidad en los criterios judiciales”, en Báez, Adriana y Reveles, Francisco, *Reglas, votos y prácticas: ¿hacia una representación política democrática en México?*, UNAM, México.

Medina, Eduardo y Villafranco, Citlalli (2018). “Claroscuros de las elecciones federales de 2018: paridad y violencia de género”, en *Revista Mexicana de Derecho Electoral*, núm. 13-14, IIIJ-UNAM, México.

Orozco, José, (2019). *Justicia Electoral comparada de América Latina*, IIIJ-UNAM, México.

Fuentes electrónicas:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2014). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/eleccionconsecutiva2021/pdf/1_Decreto_CPEUM_Reeleccion_ART_59_dof_10feb14.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2019). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (2014). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe/LGIPE_orig_23may14.pdf

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (2020). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf

Ley General de Partidos Políticos (2014). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpp/LGPP_orig_23may14.pdf

Anexo 1. Acuerdos y expedientes por entidad federativa, 2014, 2015 y 2016.

AÑO	ENTIDAD	ACUERDO OPLE	EXPEDIENTE TEE	EXPEDIENTE SR	EXPEDIENTE SS
2014	Coahuila de Z.	57/2014	40/2014	SM-JRC-14/2014	SUP-REC-936/2014
2014	Nayarit	SIN NÚMERO DE CLAVE	SC-E-JIN-33/2014	SG-JRC-70/2014	SUP-REC-892/2014
2015	Baja California Sur	CG-0100-JUNIO-2015	TEE-BCS-JDC-018/2015	SG-JDC-11339/2015	SUP-REC-544/2015
2015	Campeche	CG/51/15	PER SALTUM	SX-JDC-874/2015	SUP-REC-794/2015
2015	Chiapas	IEPC-CG/A-098/2015	PER SALTUM	SX-JRC-292/2015	SUP-REC-804/2015
2015	Colima	IEE-CG-A091/2015	JDCE-13/2015	ST-JRC-235/2015	SUP-REC-756/2015
2015	Distrito Federal	ACU-592-15	TEDF-JLDC-192/2015 TEDF-JLDC-194/2015 TEDF-JLDC-187/2015 TEDF-JLDC-185/2015 TEDF-JEL-332/2015	SDF-JRC-260/2015 SDF-JDC-645/2015	SUP-REC-675/2015 SUP-REC-679/2015 SUP-REC-696/2015
2015	Guanajuato	CGIEEG/215/2015	TEEG-REV-72/2015	SM-JDC-610/2015 SM-JDC-612/2015	SUP-REC-724/2015
2015	Guerrero	173/SE/14-06-2015	TEE/SSI/JIN/003/2015	SDF-JDC-646/2015	SUP-REC-677/2015
2015	Jalisco	IEPC-ACG-299/2015	JIN-078/2015	SG-JDC-11422/2015	SUP-REC-841/2015
2015	México	IEEM/CG/188/2015	JDCL-182/2015	ATRAE LA SS	SUP-JRC-693/2015
2015	Michoacán de O.	CG-336/2015	TEEM-JDC-932/2015	ST-JRC-213/2015	SUP-REC-690/2015
2015	Morelos	IMPEPAC-CEE-177-2015	TEE/JDC/255/2015-1	ATRAE LA SS	SUP-JRC-680/2015
2015	Nuevo León	SIN NÚMERO DE CLAVE	JDC-025/2015	ATRAE LA SS	SUP-JDC-1236/2015
2015	Querétaro	SIN NÚMERO DE CLAVE	TEEQ-RAP/JLD-45/2015	SM-JRC-308/2015	SUP-REC-741/2015
2015	San Luis Potosí	307/06/2015	TESLP-JDC-43/2015	SM-JRC-273-2015	SUP-REC-703/2015
2015	Sonora	IEEPC/CG/256/15	RQ-PP-28/2015	SG-JDC-11346/2015	SUP-REC-641/2015
2015	Tabasco	CE/2015/051	TET-JI-39/2015-I	SX-JDC-798/2015	SUP-REC-866-2015
2015	Yucatán	SIN NÚMERO DE CLAVE	JDC-06/2015	SX-JDC-802/2015	SUP-REC-575/2015
2016	Aguascalientes	CG-A-57/16	SAE-RN-0135/2016	SM-JDC-247/2016	SUP-REC-236/2016
2016	Baja California	DICTAMEN 27	PER SALTUM	SG-JDC-323/2016	SUP-REC-755/2016
2016	Chihuahua	IEE/CE198/2016	PER SALTUM	SG-JDC-306/2016	SUP-REC-736/2016
2016	Durango	175	NA	NA	NA
2016	Hidalgo	CG/256/2016	PER SALTUM	ST-JRC-65/2016	SUP-REC-245/2015
2016	Oaxaca	IEEPCO-CG-97-2016	RIN/DRP/01/2016	SX-JRC-116/2016	SUP-REC-792/2016
2016	Quintana Roo	IEQROO/CG/A222/16	JDC/025/2016	SX-JDC-461/2016	SUP-JDC-1745/2016
2016	Sinaloa	IEES/CG097/2016	TESIN-35/2016 JDP	SG-JDC-285/2016	NA
2016	Tamaulipas	IETAM-CG-168/2016	PER SALTUM	SM-JDC-271/2016	SUP-REC-743/2016
2016	Tlaxcala	ITE-CG-288/2016	TET-JE-262/2016	SDF-JRC-59/2016	SUP-REC-809/2016
2016	Veracruz de l.	OPLEV-CG-234/2016	JDC-126/2016	SX-JDC-537/2016	NA
2016	Zacatecas	ACG-IEEZ-072-VI/2016	TRIJEZ-JNE-027/2016	SM-JRC-64/2016	SUP-REC-243/2016

Anexo 2 Acuerdos y expedientes por entidad federativa, 2017, 2018 y 2019.

AÑO	ENTIDAD	ACUERDO OPLE	EXPEDIENTE TEE	EXPEDIENTE SR	EXPEDIENTE SS
2017	Coahuila de Z.	IEC/CG/177/2017	146/2017	SM-JRC-21/2017	SUP-REC-1334/2017
2017	Nayarit	EEN-CLE-130/2017	TEE-JDCN-64/2017	SG-JDC-113/2017	SUP-REC-1273/2017
2018	Aguascalientes	CG-A-41-118	TEEA-JDC-020/2018	SM-JDC-748/2018	SUP-REC-1209/2018
2018	Baja California Sur	IEEBCS-CG163-JULIO-2018	TEE-BCS-JDC-027/2018	SG-JDC-3076/2018	SUP-REC-986/2018
2018	Campeche	CG/83/18	PER SALTUM	SX-JDC-863/2018	SUP-REC-1410/2018
2018	Chiapas	IEPC/CG-A/179/2018	PER SALTUM	SX-JRC-331/2018	SUP-REC-1416/2018
2018	Chihuahua	IEE/CE258/2018	PER SALTUM	SG-JDC-3992/2018	SUP-REC-1071/2018
2018	Ciudad de México	IECM-ACU-CG-300/2018	TECDMX-JEL-214/2018	SCM-JRC-169/2018	SUP-REC-1176/2018
2018	Colima	IEE/CG/A089/201	JI-05/2018	ST-JRC-161/2018	SUP-REC-1320/2018
2018	Durango	IEPC/CG88/2018	TE-JE-043/2018	SG-JRC-85/2018	SUP-REC-987/2018
2018	Guanajuato	CGIEEG/315/2018	TEEG-REV-143/2018	SM-JRC-358/2018	SUP-REC-1317/2018
2018	Guerrero	168/SE/08-07-2018	TEE/JEC/102/2018	SCM-JRC-149/2018	SUP-REC-1041/2018
2018	Hidalgo	IEEH/CG094/2018	PER SALTUM	ST-JRC-691/2018	SUP-REC-1090/2018
2018	Jalisco	IEPC-ACG-197/2018	JIN-070/2018	SG-JDC-4076/2018	SUP-REC-1629/2018
2018	México	IEEM/CG/206/2018	JDCL/434/2018	ST-JRC-135/2018	SUP-REC-941/2018
2018	Michoacán de O.	CG-403/2018	TEEM-JDC-170/2018	ST-JRC-153/2018	SUP-REC-1102/2018
2018	Morelos	IMPEPAC/CEE/254/2018	TEEM/JDC/292/2018-1	SCM-JRC-158/2018	SUP-REC-1052/2018
2018	Nuevo León	CEE/CG/207/2018 CEE/CG/210/2018	JI-257/2018	SM-JDC-721/2018	SUP-REC-1036/2018
2018	Oaxaca	IEEPCO/CG/70/2018	RIN/DRP/01/2018	SX-JDC-814/2018	NA
2018	Puebla	CG/AC-124/2018	TEEP-A-069/218	SCM-JDC-1091/2018	NA
2018	Querétaro	IEEQ/CG/A/041/18	NA	NA	NA
2018	San Luis Potosí	SIN NÚMERO DE CLAVE	TESLP-JDC-43/2018	SM-JRC-270/2018	SUP-REC-1187/2018
2018	Sinaloa	IEES/CG086/2018	TESIN-REC-01/2018	SG-JDC-4049/2018	SUP-REC-1368/2018
2018	Sonora	CG200/2018	RG-TP-39/2018	SG-JRC-141/2018	SUP-REC-1178/2018
2018	Tabasco	CE/2018/074	TET-JI-21/2018-III	SX-JRC-186/2018	SUP-REC-949/2018
2018	Tlaxcala	ITE-CG-84/2018	TET-JE-50/2018	SCM-JRC-162/2018	SUP-REC-1021/2018
2018	Veracruz	OPELV/CG229/2018	PER SALTUM	SX-JDC-905/2018	SUP-REC-1755/2018
2018	Yucatán	SIN NÚMERO DE CLAVE	RIN-52/2018	SX-JDC-655/2018	SUP-REC-930/2018
2018	Zacatecas	ACG-IEEZ-091/VII/2018 ACG-IEEZ-093/VII/2018	TRIJEZ-JDC-112/2018	SM-JDC-707/2018	SUP-REC-1150/2018
2019	Baja California	DICTAMEN 19	PER SALTUM	SG-JDC-253/2019	SUP-REC-433/2019
2019	Quintana Roo	IEQROO/CG/A-157/19	JUN/020/2019	SX-JRC-41/2019	NA
2019	Tamaulipas	IETAM/CG-52/2019	TE-RIN-23/2019	SM-JRC-66/2019	SUP-REC-533/2019